

Conocimiento antropológico sobre los mapuche de Chile. Efectos socioculturales y económicos de su integración forzada a la nación chilena

Aldo Vidal

Para iniciar nuestro trabajo les ruego que hagamos un pequeño trabajo de grupo, muy sintético y breve, en base a tres preguntas, respecto a la situación de la población mapuche. Ustedes son de la región, conocen y trabajan con la realidad regional, pueden responder desde cualquier punto de vista.

La primera pregunta es: **¿cuáles serían los tres aspectos que ustedes consideran más importantes de la situación mapuche actual?**

La segunda pregunta es: **indicar dos factores que ustedes creen están entre los más importantes que explican o causan la situación que ustedes señalan.**

Y lo tercero: **señalar dos medidas o recomendaciones que ustedes sugerirían para resolver la situaciones iniciales, si son negativas.**

Consideremos ahora sus respuestas:

Pregunta 1	Pregunta 2	Pregunta 3
<ul style="list-style-type: none"> • Escasez de tierras. • Pérdida de identidad cultural. • Marginación y pobreza. • Migración. • Extrema pobreza. • Carencia de créditos y ayudas técnicas. • Discriminación y prejuicio racial hacia los mapuche. 	<ul style="list-style-type: none"> • Escaso interés de autoridades en el tema mapuche. • Una política histórica de relación interétnica desequilibrada. • Falta de tierras por la subdivisión. • Poca sensibilidad de autoridades. • No hay políticas de reconocimiento de la diversidad. • No hay políticas especiales para la realidad mapuche. • Falta de voluntad política del Estado y la sociedad. • La expansión del Estado chileno que arrasó con el territorio mapuche. • Las políticas del Estado, han sido discriminatorias para los mapuche. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reconocimiento constitucional de los indígenas y de sus derechos. • Recuperación y restitución de tierras con políticas de apoyo económico y técnico. • Tener voluntad política del Estado y de la sociedad para resolver el tema, con otra visión, que respete la diversidad.

Bien, como ustedes ven, tenemos un buen panorama de lo que en general es el resumen de la situación mapuche hoy día. Al menos están los aspectos más importantes.

El interés en el ejercicio que acabamos de hacer era recibir la visión de ustedes respecto a las situaciones fundamentales que afectan a los mapuche hoy, y cuáles serían las causas y las medidas de solución. Este tema tenemos que situarlo, ubicándolo en los antecedentes de esta realidad, que ustedes han reflejado tan bien y en tan poco tiempo en nuestro ejercicio. Y ello nos obliga a considerar cual ha sido la relación del Estado nacional con los pueblos indígenas, particularmente con el pueblo mapuche, a través de diferentes políticas, que se expresan, entre otros, en las legislaciones indígenas.

Nuestro punto de partida es la situación de Chile en el siglo pasado, tras el logro de la independencia de España.

Al año 1810 ocurre la declaración de independencia, la que efectivamente se logra entre los años 1818 y 1821, e incluso más tarde, ya que los últimos grupos de resistencia realista se refugiaron primero en Concepción y después en Chiloé. En el área de Concepción desarrollaron una guerra de guerrillas llamada "montonera". Muchas de esas montoneras españolas tuvieron contratos de alianza y apoyo con grandes jefes mapuche, en la zona norte y media de lo que es la Octava Región, lo que va a tener algunos efectos posteriores, en la decisión de resistencia al proceso de penetración chileno y en la acción del Estado y del ejército nacional.

Lograda la independencia de Chile se establece la República. En términos de la constitución de un Estado, la República implica el establecimiento de una soberanía jurídica, política y, por supuesto, territorial. Entonces se presentó, a ojos del Estado chileno, una situación que parecía anómala. La continuidad de la República de Chile estaba territorialmente interrumpida, al igual que el ejercicio de soberanía desde el Estado, por la existencia de territorios mapuche soberanos en la región centro sur. Chile llegaba de hecho hasta el Bío-Bío, (entre el Bío-Bío y el Toltén vivían los mapuche) y luego desde el Toltén hasta el extremo sur. Es decir, que casi al centro del país había un territorio y una población que, jurídica, legislativa, política, y territorialmente no era parte del Estado chileno.

El Estado ya en el año 1813, dicta medidas legislativas hacia los indígenas, considerándolos parte de la nación y estableciéndolos como ciudadanos iguales a otros. Evidentemente estas medidas tuvieron sentido y efectos para el Estado, pero no para los propios mapuche que vivían en la región entre el Bío-Bío y Toltén, porque ellos no eran ni se sentían parte de la nación y del Estado chileno. Habían conservado su independencia después de muchos años de conflictos con los españoles, con los que en 1641, se firmó el tratado de Quilín, por el cual se estableció que la frontera norte del territorio mapuche era el río Bío-Bío, la frontera sur el Toltén, y que los grupos mapuche que vivían en esa área eran independientes de la Corona

española. Ese acuerdo fue refrendado por la Corona española, es decir no sólo fue firmado por el Gobernador de la época, sino que el Gobernador lo envía a España y en España lo firma la Corona.

Por tanto, incluso desde el punto de vista jurídico, los mapuche eran independientes. Habían firmado un tratado con una potencia, con un Estado reconocido. Aún más, posteriormente, en el Parlamento de Negrete el gobernador Ambrosio O'Higgins ratificó ese acuerdo, en 1803.

De manera que la guerra de la independencia de Chile fue un problema de los chilenos, no de los mapuche, en ella los mapuche tuvieron muy escasa participación, y la que existió fue en apoyo a España, en virtud de los tratados. Y luego, obtenida la independencia, y establecida la República y un Estado nacional, los mapuche no consideraron ni objetiva ni subjetivamente ser parte de ese Estado.

Este problema comenzó a preocupar al Estado chileno, en términos de cómo incorporar definitivamente ese territorio, porque además estando en esa situación, dicho territorio era posible de ser reclamado por otros países, por otras potencias.

De allí que el año 1859 el Estado nacional decidió incorporar ese territorio por medios político-militares. Estableció algunas alianzas, y convenios militares con jefes mapuche, se construyeron líneas de fortificaciones militares, de costa a cordillera y de norte a sur a partir del Bío-Bío al sur, y se trató de negociar con grupos mapuche. Se apoyó además políticas de inmigración de individuos chilenos en los territorios mapuche, lo que desató una adquisición fraudulenta de tierras, mediante diversas formas de engaños. El resumen de la situación es que se generó un conflicto, porque los mapuche se sintieron engañados, se sintieron atropellados. Ustedes saben que la cultura mapuche tiene una concepción de la tierra, y la tenía ya entonces, muy particular. Obviamente los mapuche no tenían ninguna de las categorías propias de la economía occidental de la época, como propiedad privada, renta, arriendo, venta de la tierra, etc. Los mapuche no se sentían vendiendo la tierra, porque para ellos la tierra no era posible de vender, la tierra era algo dejado por los antepasados y los seres sagrados mapuche, para la reproducción en el tiempo, hasta siempre, y no podía ser propiedad privada de grupos o individuos.

Se desató entonces una serie de conflictos, y el Estado diseñó legislaciones que llamó «protectoras de indígenas», porque quería regular el acceso y el control a la tierra, incluso regular la conducta de los funcionarios públicos que se apoderaban de las tierras indígenas. Pero esa fue una situación irregulable, pues la realidad social de hecho hizo la situación irregulable. Y tampoco el propósito real del Estado era sólo regular el traspaso de tierras indígenas, el propósito final del Estado era incorporar el territorio a la soberanía nacional y, de acuerdo a ello más o menos en 1869 decidió iniciar la ocupación militar en la Araucanía.

Esa ocupación quedó interrumpida durante la guerra del Pacífico, que tuvo Chile con Perú y Bolivia, pero una vez terminada esa guerra ganada por Chile, gran parte de las tropas fueron enviadas al sur, para culminar lo que ustedes conocen como la «Campaña de Pacificación de la Araucanía» en el año 1883. En esa fecha se produjo la derrota militar definitiva de los mapuche y entonces se readecuó una anterior ley de radicación, de 1866 (que no se había implementado porque no se tenía pleno dominio del territorio y por conflictos internos del Estado chileno) y se dictó la ley de radicación de enero de 1883.

En esta ley, el Estado chileno declara que todo el territorio entre el Bío-Bío y el Toltén es propiedad estatal y decide rematar, subastar o entregar esas tierras a colonos nacionales, extranjeros y miembros del ejército; para los indígenas establece la política de reservas, es decir, radicar a los grupos indígenas que controlaban ese territorio, en pequeños asentamientos de tierra, a través de un título que, irónicamente, el Estado llamó Título de Merced. Ello a través de una Comisión Radicadora, ante la cual los mapuche que quisieran derecho a tierra tenían que concurrir para demostrar, con testigos, que estaban ocupando un pedazo de suelo, por al menos un año. A nombre de ese mapuche, de ese jefe mapuche, de quienes lo acompañaban, y de sus familiares, se entregaba el Título de Merced, un documento reconociendo que ellos, como grupo, y en tenencia común, no en título individual, tenían derecho a un cierto cupo de tierras.

En general, se fijaron cupos máximos de suelos, para la entrega de estos Títulos de Merced, entre 4 a 6 hectáreas por persona, aunque hubo variaciones que dependieron en general, de dos tipos de situación. Una fue la situación geográfica, porque en la cordillera se entregó más tierras por reducción; la otra fue el tipo de relaciones que, anteriormente a la conclusión de la derrota militar, habían sostenido jefes mapuche con sectores chilenos, fueran sectores de comerciantes, del gobierno nacional, de la administración de la zona norte (provincia de Arauco) o con sectores del ejército y las Fuerzas Armadas (incluso hubo mapuche que fueron miembros de las Fuerzas Armadas y que tuvieron grado dentro del ejército chileno en la campaña contra los propios mapuche). A esos jefes, y a mapuche relacionados con los sectores mencionados, como recompensa, se le entregó mucha más tierra. Pero los promedios oscilaron entre 4 a 6 hás. Se entregaron 526 mil hectáreas aproximadamente, para alrededor de 80, 82 mil mapuche.

Esta voluntad del Estado chileno, de radicar a los mapuche, significó que ellos, repentinamente, perdieron 9 millones y medio de hectáreas; porque a partir del tratado que habían hecho con la Corona española los mapuche controlaban alrededor de 10 millones de hectáreas.

Y se origina entonces una situación de tipo jurídico-político respecto de la cual los mapuche hoy nos están demandando. En general, en el derecho internacional se reconoce que las formas de ocupar territorios son: la cesión de un Estado a otro Estado, la compraventa, la conquista militar mediante declaración de guerra. Sin embargo, existe un tipo de doctrina

que han sostenido los Estados, que se llama Terra Nullius, que viene del latín, y equivale a «Tierra de nadie», por la cual los Estados estiman que si no hay un Estado similar al de ellos, las tierras existentes, aunque estén ocupadas no son reconocidas como ocupadas, y se puede hacer apropiación de ellas. Es una doctrina que han empleado todos los Estados para justificar la apropiación de territorios indígenas, y tácita o implícitamente es la doctrina que emplea el Estado chileno para considerar que esa tierra de la Araucanía no estaba en disputa con otro Estado de estatuto similar al chileno, por lo tanto podía ser incorporada a la soberanía del Estado chileno.

La interpretación de muchos de los grupos mapuche y de gente que se apoya en la evolución del derecho internacional es que las tierras estaban ocupadas por los mapuche y que el Estado chileno no hizo declaración de guerra, que era lo que debía hacer, dado que en virtud de los tratados con la Corona, los mapuche estaban reconocidos como una entidad política por el Estado español. Al ser así, la única forma que el Estado chileno debería haber usado para apropiarse los territorios mapuche era la conquista luego de una declaración formal de guerra, porque era un cuerpo político lo que tenía en frente, no una tierra ocupada por una entidad política no reconocida por un Estado occidental.

Hay ahí un tema en debate, y existen iniciativas de plantear demandas internacionales contra el Estado chileno a este respecto. Este hecho es también el que da pie, entre otros, a las indemnizaciones que se exigen al Estado chileno. No sólo porque nos quitó el territorio o la tierra - dicen los mapuche -, sino porque lo hizo mediante un acto de enfrentamiento en que no hubo declaración de guerra.

Desde un punto de vista general, volviendo al tema de la radicación, es ella la medida que objetivamente determina toda la situación que ustedes detectan hoy día en los mapuche. Es decir, a partir de allí se inicia o arranca el principal factor que va a determinar el destino, a corto, mediano y a largo plazo, del pueblo mapuche dentro del Estado-nación chileno.

¿Qué aspectos es necesario considerar respecto a la medida tomada por el Estado, de radicar a los mapuche?

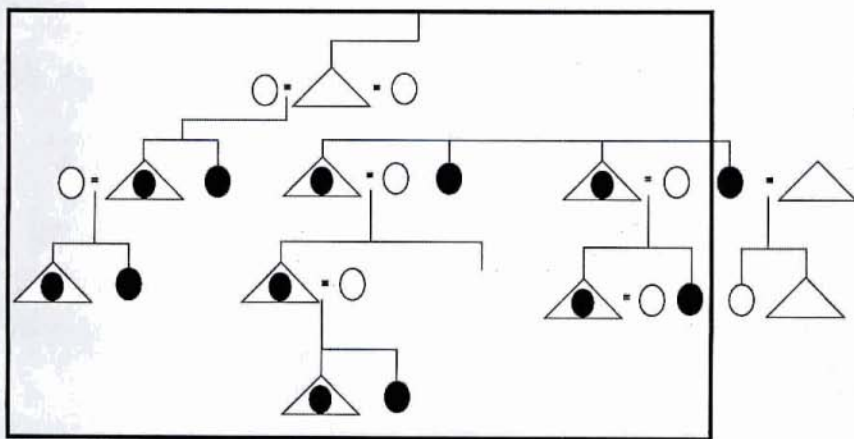
Primero, es importante darse cuenta de que los mapuche de la época no vivían en grupos desorganizados. Es decir, por más que alguna gente diga o crea que los mapuche, «estos indios», estos indígenas, vivían medio salvajes, probablemente con unos jefes que elegían viendo quién sostenía más un tronco, no hay datos que avalen tales apreciaciones. Al contrario, ellas son parte, a lo más, de una mitología, -y de una visión que llamamos en la antropología, etnocéntrica -, respecto a cómo es la vida social de otros grupos, de grupos indígenas. La ciencia nos enseña que los indígenas pueden tener formas muy complejas de organización y estructura social, algunas hasta más complejas que las propias nuestras, y el caso de los mapuche es más o menos de este tipo.



Por lo tanto, para entender el pleno impacto de las medidas de radicación hay que referirse un poco a cómo era la organización social, económica y territorial de los mapuche, antes de que el Estado chileno los derrotara.

Un primer dato importante que hay que conocer, es que los grupos mapuche, ya en el siglo XVIII, habían iniciado un proceso de conquista del área transandina, es decir, habían iniciado un proceso de expansión territorial, estando ya en guerra con los españoles y habían llegado a imponerse y a controlar toda el área pampeana y parte de la Patagonia Argentina, en lo que se ha llamado «araucanización de la pampa», llegando por el Norte incluso a sitiar la zona de Buenos Aires. «Araucanización», porque los grupos de allá, siendo controlados, sometidos por los mapuche de acá, adoptan muchos de los patrones culturales mapuche, incluida la lengua, vale decir «se araucanizan». Entonces, no eran cualquier grupo de individuos, sin ningún tipo de organización o estructura de reproducción sociocultural, económica, política, territorial, etc.

Para los aspectos concretos de la organización social mapuche, veremos algunas figuras en las transparencias, partiendo por una carta básica de cómo se organizaba el parentesco, porque ello era la base de construcción de casi toda la organización social mapuche.

Figura 1: Carta de parentesco familia extensa mapuche tradicional



= : matrimonio  : hombre ○ : mujer ● : parientes matrilineales (de un linaje)  : familia extensa, que vive en una vivienda

En esta figura los triángulos representan hombres y los círculos a mujeres. Aquí mostramos cómo era el tipo de familia mapuche en el siglo pasado, antes de la radicación.

La familia era una familia extensa, es decir, vivían en un hogar miembros de tres generaciones: abuelos, padres e hijos de los padres; esa era la unidad última, la más básica, la que sería posible observar si se recorría el área mapuche en esa época. No se vivía sólo con los hijos, sino que estaba siempre presente la generación de los mayores, los más ancianos.

Estas unidades familiares, todas ellas, estaban organizadas en base a una idea del parentesco que es bastante compleja, que en el caso mapuche no ha sido muy estudiado. Al respecto debo indicar que los pueblos tienen distintas ideas de lo que son las relaciones de parentesco, de cómo calificar los tipos de parientes, de lo que significa la llamada relación de sangre, y entre quienes existe; de quiénes son parientes entre sí, y de los tipos de parientes que existen.

Así, por ejemplo, podemos preguntarnos por qué llamamos «tíos» a los hermanos por parte del padre y también a los hermanos por parte de la madre. ¿Por qué, si vienen de dos lados distintos? ¿A qué lógica responde eso? ¿Tiene que ver con la genética? Con preguntas similares podremos concluir que las ideas sobre el parentesco son creencias culturales, y los mapuche tenían un sistema de creencias acerca del parentesco, distinto al nuestro.

Ellos separaban en consanguinidad, es decir como parientes por sangre, a los hijos e hijas de los hermanos hombres, respecto a los hijos e hijas de sus hermanas. Por ejemplo, en la figura anterior apreciamos las familias: marcamos con negro a los parientes consanguíneos de este hombre, todos los que están con negro lo son, es decir, los hijos y las hijas de ese hombre, pero no los hijos e hijas de sus hijas. Observen en el cuadro que los hijos e hijas de sus hijas no son miembros del grupo de parientes de ese hombre. Ese es un sistema conocido también en otros pueblos, que en antropología se denomina «descendencia patrilineal». Los mapuche, por tanto, vivían organizados en grupos patrilineales. Se constituía entonces lo que en antropología se llama un «linaje», un grupo que tiene un sistema de parentesco con una línea de descendencia determinada, con antepasados conocidos reales, que manejan recursos colectivos y que se reproduce en el tiempo.

La descendencia unilineal implica que se otorga distintos derechos a las personas, según si se consideran consanguíneos, miembros del grupo de parientes o no. Esto significa, en el caso mapuche, que por ejemplo los derechos de sucesión y de herencia, como los referidos a tierras -no el derecho a propiedad, porque no podía haber propiedad privada de la tierra- estaban en general negados a las mujeres, porque la tierra pertenecía, desde lo sagrado, a un grupo patrilineal. Las mujeres no tenían derecho a suelo en la casa de sus padres, a menos que no hubiera ningún hermano de ellas, o del padre (los derechos a suelos de las mujeres requerían de una serie de condiciones, que no es del caso tratar acá).

Además, en este sistema patrilineal, como vemos en la figura anterior, había un sistema de matrimonio polígamo, que se llama «poligínico», es decir, era legal el matrimonio con más de una mujer. Y en el las mujeres, al casarse, debían, - y en general aún hoy es así - irse de su grupo de parientes, porque la norma era «patrilocal», es decir si ella se casa se va, pero al lugar de la familia del hombre, en general a la casa de los padres de él. Y en esa casa de los padres de él, los hijos de esta mujer tendrán derecho a suelo, derecho de herencia, derecho de sucesión, etc.

Sabemos también que en el matrimonio no cabe casarse con personas que sean parientes consanguíneos. En el sistema mapuche tampoco; nadie se puede casar con un consanguíneo, pero como los hijos de hermanos y hermanas se consideran pertenecientes a distintos grupos, ellos no se consideran parientes consanguíneos, como lo hacemos nosotros. De allí que los hombres se casaban con las primas por el lado de la madre, que para ellos no eran primas, no eran parientes. O bien se casaban con una sobrina por el lado del hermano de la madre, pero para ellos no era sobrina, no era pariente consanguínea. Es difícil entenderlo, porque nuestra creencia y sistema de parentesco es distinto, pero hay muchos sistemas parecidos al de los mapuche.

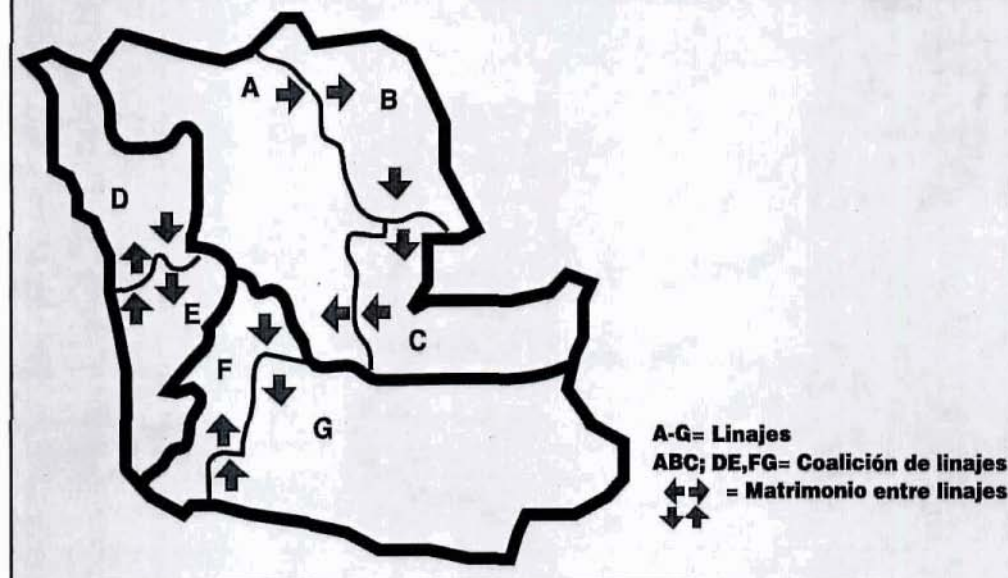
En cambio eran parientes entre sí, considerados hermanos, los hijos de hermanos de padre. Por ello, un mapuche no podría casarse con una hija de un hermano de su padre, pues ellos dirían que es incesto dado que en su sistema ella es una hermana, y podrían ajusticiar o expulsar del grupo a quien lo hace, de acuerdo a sus creencias y a su sistema de parentesco.

Lo que interesa de este sistema es lo que producía, y qué era entonces lo que creaba.

Observen que como había obligación de casarse fuera del grupo de parientes, uno debía casarse con personas de otros grupos, y el que todos tuvieran que hacerlo así creaba relaciones entre grupos patrilineales. Las esposas había que obtenerlas en otros grupos, los derechos de los hijos de las hijas serían obtenidos en otro grupo, a un grupo llegaban a vivir mujeres de otros grupos al casarse con hombres del grupo, etc.

Había entonces, un conjunto de grupos patrilineales, relacionados, entre otras razones, porque intercambiaban mujeres, se casaban entre sí. Por ejemplo, los parientes de un grupo A, (un tipo de patrilineaje) no se casan entre ellos, los hombres de A buscan mujeres en el patrigrupo B; y los hombres de B las buscan en el patrigrupo C, etc.

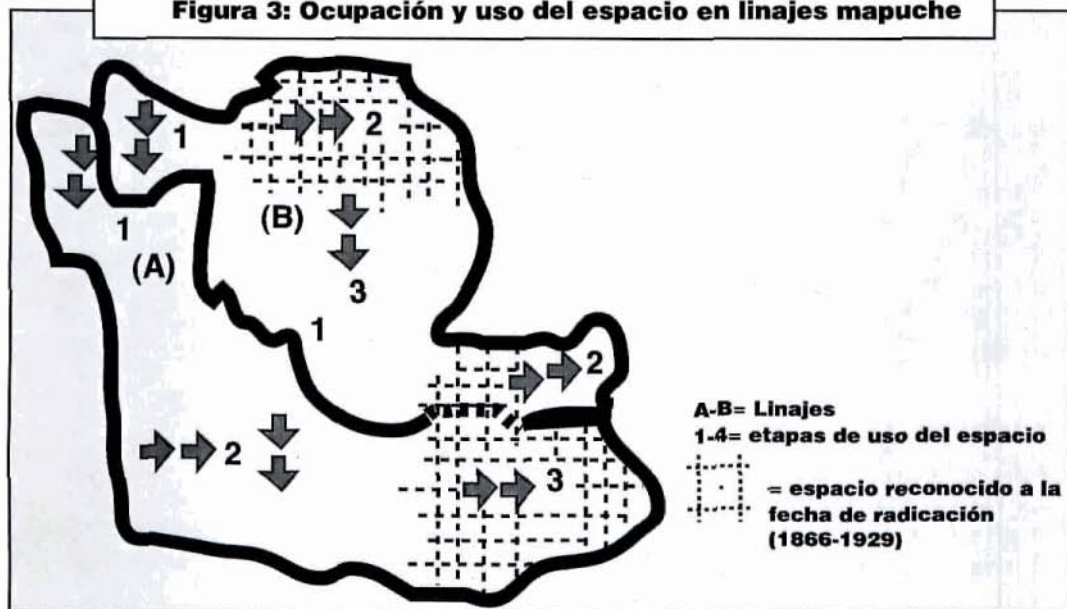
Figura 2: Coalición de linajes en un espacio mapuche prereducional



Esto significa que, por las reglas del parentesco ocurren conexiones, se producen vinculaciones entre grupos que de otra forma serían aislados. Si examinamos estas vinculaciones entre grupos podemos darnos cuenta que en el territorio mapuche había varios, en un sistema de intercambio matrimonial y por tanto de intercambio económico, social, político, etc. Esta coalición de grupos vinculados era entonces la que tenía y controlaba un territorio, y en otro territorio vecino había otra coalición de grupos, y así sucesivamente. Tal era la situación al momento que vino la llamada «pacificación».

Estos grupos además, ocupaban económicamente su territorio en forma móvil, lo que significa que temporalmente podían tener una zona de su territorio en descanso. Los distintos grupos se movían dentro de su espacio territorial no ocupando nunca, a través de asentamientos ni actividades económicas, todo su territorio, y por tanto todas sus tierras.

Figura 3: Ocupación y uso del espacio en linajes mapuche



Esa era la situación cuando vino la radicación, a través de una ley. La fundamental es la de 1883, que - como dijimos antes - readecuó una anterior ley de radicación, de diciembre de 1866. Por esa ley de 1883 el Estado chileno establece los Títulos de Merced y le dice a los grupos mapuche: pueden solicitar su tierra, les vamos a dar un Título de Merced, un documento que indicará la tierra que tendrán, con un promedio entre 4 ó 6 hás. por persona. Esa ley indica que se reconocerán sólo las tierras efectivamente ocupadas por los grupos mapuche, con una ocupación mínima de un año.

Con esa medida cada grupo mapuche perdió casi todo su territorio, porque desde el punto de vista legal, no podían demostrar la ocupación de todo su territorio, es decir de los espacios y territorios que tenían en reserva, que tenían para uso móvil en el tiempo, para mantener la reproducción del medio ambiente, para no agotar los recursos.

Entonces, a este grupo A, que estaba en 1883 en un lugar de todo su territorio, la ley le permitió reclamar sólo el que ocupaba en ese momento. Al grupo B, que estaba en otro sector de su territorio sólo ese, etc. Esa era la máxima permisividad o posibilidad legal.

Eso determinó que, aparte de perder casi 10 millones de hectáreas, como pueblo, cada grupo patrilíneo específico perdió casi todo su territorio, y por ende la tierra. Desde allí los mapuche pasaron de tener 10 millones de hectáreas a tener sólo las reconocidas por el Título de Merced.

Lo grave de esta medida debe ponderarse pensando, además que en su evolución anterior los mapuche nunca fueron agricultores, sino más bien fueron una sociedad ganadera y la expansión de ellos como sociedad poderosa se produjo justamente en base a esa actividad. Los mapuche manejaban millones de cabezas de ganado, controlaban casi todo el comercio fronterizo de ganado chileno y argentino, porque tenían además, una gran cantidad de territorio. En esa época nacieron los grandes jefes, los grandes lonkos, se produjo el desarrollo de la platería, uno de los símbolos de status de la época, pero ellos nunca antes fueron agricultores.

Se reconoce así el impacto de la reducción, en una sociedad ganadera que pierde sus tierras. Un grupo pudo tener mil cabezas de ganado, y mucho más de cien hectáreas, hasta un día cualesquiera en que el Estado lo cambia. Los mapuche están derrotados, la tierra pasa a ser del Estado que decide dejarles 4 - 6 hectáreas a cada uno.

Eso pasó con los mapuche; de ser una sociedad en expansión, muy rica, pasa a verse, de un día para otro, sometida a reducirse a un territorio pequeñísimo y a perder toda la riqueza económica que tenían, y su ganado. Los mapuche en un período de tiempo entregaron en los mercados locales y transandinos, casi toda la masa de ganado que no podían mantener, (y eso permitió a algunos grupos sostener una posición económica mejor durante un primer período post-reduccional).

Por lo tanto, con la medida de radicación, con la poca tierra y sin ganado, los mapuche quedaron convertidos en minifundistas, ya en esa época. El promedio real de tierras por persona en los Títulos de Merced son 6.1 hectáreas por individuo. Ya en esa época 6.1 hectárea era poco, era minifundio. Eso implica que a los mapuche se les impone, de un día a otro, la camisa de fuerza de ser «campesinos» o «agricultores», actividad en la cual no tenían ninguna tradición ni desarrollo técnico alguno. Desde entonces comienzan a ser vistos y evaluados como agricultores, por el resto de la sociedad chilena.

Que no habían sido agricultores, y que se los quería convertir en «campesinos agricultores» lo demuestra, entre otros, el que en la época hubo el propósito de enseñarle prácticas agrícolas «a esos pobres indios que no sabían nada». Entonces, a los legisladores no se les ocurrió nada mejor que tratar de que, en todos los casos en que se entregaban Títulos de Merced, se estableciera, al medio o alrededor de las reducciones, parcelas de tierra entregadas a colonos, para que les demostraran a los indígenas cómo trabajar la tierra y cómo aplicar técnicas agrícolas. Por supuesto a estos colonos se entregó más hectáreas: 40 en promedio a los colonos nacionales, 500 en promedio a los extranjeros, 50 en el caso de Malleco para colonos suizos y otros.

¿No parece absurdo exigir demostrar una capacidad agrícola y de aprendizaje a los mapuche, cuando se está entregando una cantidad mucho mayor de recursos al demostrador y casi nada al que debe aprender y aplicar? Más aún cuando el aprendiz nunca tuvo tradición agra-

ria. ¿Y no es más absurdo aun, que después se diga que ese aprendiz es un flojo, mal agricultor, y en cambio el colono no?

Por otra parte, de esta política de cercar reducciones, o de incluir en reducciones a colonos, se origina parte del problema de la **usurpación de tierras** a los mapuche.

El problema de las tierras usurpadas tiene uno de sus orígenes en el establecimiento de colonos, que se situaron al centro o a los bordes de las áreas reduccionales mapuche. Por supuesto que la primera intención de esos sujetos debe haber sido no el pensar cómo se enseña a los vecinos mapuche, sino cómo ampliaban ellos mismos su cantidad de tierra, en base a las tierras de las reducciones. Por ello, ya establecida la radicación, empieza un proceso de pérdida de las tierras que el propio Estado había entregado a los mapuche. De las 530 mil has, se calcula que 150 mil fueron usurpadas, en un proceso que continuó hasta alrededor de los años cincuenta, pero que tuvo su fase álgida entre los años 1890 y 1930.

Por todas estas razones es que los efectos de la radicación para los mapuche son dramáticos. Fue pasar de ser una sociedad en expansión, con un territorio reconocido por un Estado extranjero que la quiso dominar, y que tiene un gran control territorial, que ha llegado a un fuerte desarrollo económico, a una sociedad o pueblo derrotado por un Estado muy superior en lo técnico y militar. Significó ser establecido en áreas reduccionales pequeñísimas, perder la riqueza ganadera y además sufrir la usurpación de las propias tierras que el Estado entregaba, y respecto de lo cual, el Estado no hizo, ni políticamente ni jurídicamente nada.

En este aspecto el Estado ha omitido un deber, el de regular las conductas de los actores en la sociedad nacional y hacer establecer la propia juridicidad que el Estado se da. El Estado chileno ha permitido que estos delitos, la usurpación y apropiación fraudulenta de tierras, fueran cometidos en tierras indígenas, por tanto no ha hecho valer su propia juridicidad, que castiga esos delitos, hasta hoy día. Y, por último, si el Estado en el pasado lo permitió, hoy lo que tendría que hacer es compensar o indemnizar, ante su propia omisión de una acción de justicia para los grupos indígenas, como ha ocurrido en el caso de otros Estados.

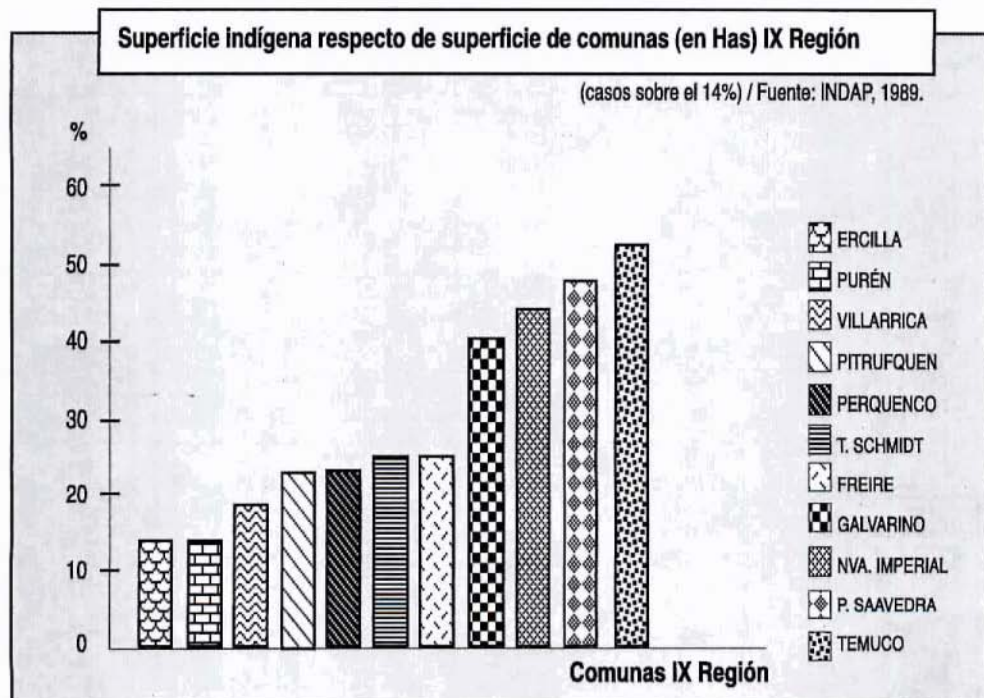
La política en la legislación internacional hoy día es tal, y gran cantidad de Estados lo están haciendo así. En el caso del Estado chileno, esto no sucede.

¿Y qué sucede con los efectos de la radicación para las generaciones posteriores? Ellas deben vivir la situación de carencia, atropellos y discriminación, heredadas de los antepasados; tratando, en esas difíciles condiciones, en ese marco de hierro de la reproducción, de salir adelante. Y decimos marco de hierro porque las reducciones fueron pensadas como cantidades de tierras fijas y no ampliables. Como dijeron ustedes en el trabajo inicial, se entregó una cantidad de tierra y no se pensó en la reproducción demográfica, la reproducción biológica en el tiempo. Por ello fueron naciendo hijos, pasando generaciones, siempre en la misma cantidad de tierras. Por ello, si a un hijo se puede dar una hectárea, él a su hijo

le va a poder dar media, o menos. Y los nietos irán a tocar un octavo, o nada. Y además se les dice que son ineficientes, despilfarradores, flojos, etc. Hay entonces un marco de hierro fijado por el Estado, respecto del monto de recursos productivos puestos al alcance de la población, y de las probabilidades de reproducción en el tiempo. Y ello parte con las reducciones, con la radicación.

Parte de la situación que comentamos, de los impactos a hoy día, se puede apreciar en la distribución de las tierras a nivel de la región.

GRÁFICO: Cantidad de tierras indígenas por comunas



En el gráfico vemos la superficie de las tierras indígenas respecto a la superficie total de tierras de cada comuna en la Novena Región. Están sólo los casos donde las tierras indígenas son más del 14% de las tierras en la comunas.

Entonces, vemos que en Temuco, el 60% de las tierras comunales son tierras indígenas. Y donde apenas sobrepasan el 14% es en Ercilla.

En la tabla siguiente, vemos las cantidades de hectáreas promedio por mapuche, en cada comuna. En Curacautín, por ejemplo, el promedio que tienen los mapuche que viven en reducciones es 2.1 há. En Angol es 7.3, en Collipulli 1.9, en Renaico casi cero, en Vilcún 1 há., etc. Observen que en Temuco, la comuna donde el 60% de las tierras es indígena, el promedio de hectárea por persona es 1.9 há.

Por último, la columna central de la tabla señala cuánto respecto del total de las tierras indígenas, representan las tierras indígenas de cada comuna. Por ejemplo, en Curacautín las tierras indígenas representan el 0.2% de todas las tierras indígenas de la región. En Temuco, las tierras indígenas de la comuna, representan el 2.46% de las tierras de toda la región.

TABLA: Cantidad en porcentaje (%) de tierras indígenas por habitantes y por comunas en la IX Región, Chile.

	PROPIEDAD	INDÍGENA	IX REGIÓN
	HAS.	%	%
	/ HABTE.	TIERRAS INDÍGENAS	TIERRAS INDÍGENAS
		/ TIERRA COMUNA	/ TIERRA REGIÓN
CURACAUTÍN	2,1	0,2	0
ANGOL	7,3	0,28	0,68
COLLIPULLI	1,9	3,78	23
LONCOCHE	8	3,81	3,8
GORBEA	11,8	4,04	0,7
RENAICO	0	4,92	0,32
VILCUN	1	4,97	1,92
CUNCO	3	5,02	1,88
PUCON	,7	5,2	1,93
MELIPEUCO	,3	6,21	1,43
LONQUIMAY	8	6,36	5,14
LOS SAUCES	4,1	7,14	1,57
VICTORIA	2,7	7,43	2,37
CURRAREHUE	11,6	7,46	2,08
TRAIGUÉN	3,3	8	1,8
LAUTARO	2	8,73	3,73
TOLTEN	4	9,63	2,2
CARAHUE	2,3	11,11	3,64
LUMACO	5,2	1,2	3,08
ERCILLA	1,8	14,59	1,7
PUREN	9,3	14,64	1,78
VILLARRICA	37,4	18,9	6
PITRUFQUEN	21	22,63	3,24
PERQUENCO	3,4	22,93	2
T. SCHMIDT	2,2	23,46	3,33
FREIRE	2,2	23,58	5,37
GALVARINO	3	42,28	6,23
NVA. IMPERIAL	2,9	46,26	13,37
SAAVEDRA	8	52,43	4
TEMUCO	9	60	12,46

Fuente: Informativo INDAP, 1988.

¿Pero los mapuche en la comuna de Temuco tienen efectivamente el 60% de las tierras de la comuna?

En el papel, en el documento del Título de Merced sí las tienen. Las tierras indígenas, en la comuna de Temuco eran el 60% de las tierras de la comuna. Lo que sí ocurre es que el Título de Merced, en muchos casos no representa la realidad existente, porque en 1890, 1930, 40, 50, etc. se perdió una buena parte de tierras indígenas, por acciones de colonos, o acciones ilegales de personas alrededor de las reducciones, y eso no está exactamente contabilizado y descontado de los montos originales de los Títulos de Merced.

Esas tierras perdidas no están representadas. Es decir, si uno calcula y dice que en la región debería haber alrededor de 400 y tantas mil hás. (porque hubo también Títulos de Merced en la Octava y en la Décima) y suma las cantidades reales que hoy existen en la IX región, en reducciones, faltan tierras. Pero no se sabe exactamente, donde, caso por caso, porque no hay ningún estudio de tierras usurpadas por comuna.

En ese sentido, la cantidad que aparece en los Títulos no es la cantidad de tierra real que manejan los mapuche. A esa cantidad que mencionan los Títulos, hay que restarle más o menos 150 mil hás. que son aproximadamente las usurpadas. Pero no sabemos en qué comunas restamos más, en cual menos, y cuánto en cada caso.

Por ello pensamos que en la comuna de Temuco los mapuche deben tener cerca del 60% de las tierras, ya que en esta comuna quizás no sean tantas las tierras usurpadas como en otras comunas. Se dice que hay más tierras usurpadas en otras comunas, por ejemplo en Loncoche, aún cuando tampoco se sabe cuántas. Lo que se sabe es por los reclamos y demandas, o por los conflictos por tierras usurpadas, pero no existe un estudio sistemático por comuna.

¿Podría decir algo respecto a la reforma agraria y luego a las políticas durante la dictadura militar, no para ver las tierras usurpadas, sino los títulos de propiedad que hoy día tienen, porque tienen que existir títulos de propiedad hoy día, al territorio?.

Bien. Estábamos en visualizar la tierra reduccional y las consecuencias. ¿Qué viene después de la etapa reduccional? El Estado chileno entregó las tierras en base a un título en común, pero desde el principio tuvo la voluntad de producir una división y una titulación individual de las tierras indígenas. Y en 1927, 1931, 1961 y 1979 se dictan legislaciones divisorias, entre otras.

¿Qué efectos tuvieron estas leyes divisorias?. Decíamos que se constituyeron, alrededor de 3129 títulos de merced entre el año 1883 y 1929, originando las reducciones -que no es lo mismo que la comunidad- pues la reducción es lo que nace por el Título de Merced.

Con la aplicación de las leyes divisorias, hasta el año 1971 se habían dividido sólo 832 Títulos de Merced, lo que alcanza alrededor del 28% del total, la mayoría en la provincia de Malleco. El resto permanecía con la tenencia titular-legal en común, pero no con una tenencia real de la tierra en común. La gente, rápidamente y establecida en reducciones se adapta a su nueva situación, y casi forzosamente, por la nueva realidad tan carencial en que deben vivir, adopta un patrón de tenencia individual, familiar, de la tierra. Y la asignación de tierras a los nuevos miembros, que antes se hacía a partir de los grupos de parentesco que analizamos, se empieza a hacer a partir de las familias directas, en las familias donde se nace. Ellas asignan la tierra, no un jefe de familias, porque con la reducción ya deja de operar el sistema organizativo propio, se derrumba, no puede seguir operando. Entonces se inicia de hecho un manejo y tenencia individual - familiar del suelo reduccional.

Como se indicó, con las leyes de división, hasta 1971 se dividieron 832 comunidades. El año 1970, fue elegido el gobierno llamado de la Unidad Popular, y se produjo un cambio en las tendencias legislativas que se habían establecido por más de 50 años en Chile. Estas fueron tendencias divisorias cuya lógica orientaba a hacer entrar las tierras indígenas en el mercado de tierras, para poder resolver el problema del minifundio mapuche, para poder resolver el problema de las productividades y el problema de la pobreza mapuche. La gran solución se veía entre otras medidas, en una titulación individual divisoria, que permitiera actuar a los mapuche en torno al mercado de tierras.

En la Unidad Popular se establece una política absolutamente distinta y contraria, que busca impedir por todos los medios la división de las comunidades. Y se establece entonces, el criterio de que para dividir, hay que tener la aprobación de más de un 50% de los ocupantes.

Hubo además una política completamente distinta respecto del tema de las tierras usurpadas. Estas nunca fueron reconocidas por un cuerpo legislativo chileno, incluso hasta hoy día. El Estado nunca propuso una medida de resolución para el tema de las tierras usurpadas. Eso no ha ocurrido ni siquiera en la ley del llamado período de transición a la democracia, en 1993, durante el gobierno de Aylwin. En el único período en que ello ocurrió fue en el gobierno de la Unidad Popular, a través de la ley indígena 17.729, que reconoce la existencia de las tierras usurpadas y establece mecanismos por los que el Estado va a devolver estas tierras a los mapuche. Y los mecanismos considerados por esta Ley fueron: la expropiación - lo que llamaron mecanismos de expropiación restitutoria, es decir, de devolución de tierras usurpadas - y, los mecanismos de devolución vía reforma agraria.

Esta ley de la Unidad Popular alcanzó a funcionar aproximadamente un año; desde que se promulgó en 1972, hasta el golpe de Estado, en 1973. Durante ese año se devolvieron alrededor de 50 mil hectáreas, del total de 150 mil hectáreas usurpadas. Además, las expropiaciones vía reforma agraria, vía tomas aceptadas, o vía recuperaciones y no recuperaciones de hecho, significaron un reconocimiento, tácito o implícito, de tenencia de otras tierras para los grupos mapuche.

Posteriormente se dicta la ley indígena del gobierno militar. Este gobierno devolvió a los antiguos propietarios casi toda la tierra que el gobierno de la Unidad Popular había entregado o reconocido a los mapuche, y dictó una ley indígena en base a una serie de consideraciones, propias de la ideología liberal y neoliberal del período, y propias de doctrinas fuertemente nacionalistas.

Uno de sus principios, fue la idea de que todos somos chilenos y que aquí no hay indígenas. Por ello, cuando se promulga el decreto 2.568, - la “ley indígena de los militares”- se establece que, una vez que las comunidades se dividan y se entreguen los títulos, dejan de ser indígenas las tierras y los ocupantes de las tierras, pues todos somos parte de una nación. En su fundamentación para modificar y anular la ley 17.729, desarrolla un marco conceptual justificatorio de la visión propia de los militares respecto de esta ideología nacionalista, que negaba la posibilidad de reconocimiento a la existencia de otras categorías identitarias o culturales dentro del país. Si bien, reconocían tener valores y cultura propia, los ideólogos del período militar, consideraban esto como secundario a la hora de resolver problemas de pobreza.

Un segundo componente importante de las ideas base de la visión del gobierno militar, es el hecho de que al no ser propietarios individuales, se impide a los individuos tomar decisiones económicas libres, y que desde ese punto de vista, las políticas que han protegido a las comunidades han sido políticas nefastas, desastrosas.

Por otra parte, basados en datos regionales ellos consideraron demostrado el hecho de que los mapuche de la región, constituían un cordón de pobreza que impedía el desarrollo regional. Y más aun, que este “cordón de pobreza”, estaba determinado por la particular situación de propiedad de las tierras, pues los mapuche - por lo que dictaminaban las legislaciones anteriores - no podían vender sus tierras, y si no tenían un título de un bien - como la tierra - no podían participar plenamente en el sistema crediticio ni financiero. Por tanto, dicen los militares, estaban imposibilitados de hacer inversión. Desde ese punto de vista, toda la política anterior hacia tierras indígenas para los mapuche, habría sido un desastre.

Desde otro punto de vista, las políticas de minifundio, que habían tenido las legislaciones anteriores, como no contemplaban la particularidad del minifundio indígena, no beneficiaban al minifundista mapuche. En el fondo, a ese minifundista mapuche no lo atendía nadie.

Los militares creen que su gobierno, por primera vez, se hacía cargo de esto y decidieron que era necesario dividir las reducciones, es decir entregar títulos individuales de propiedad. Y lo hace, de hecho, de una manera forzada. De allí que, al año 1989 había, según las informaciones de Indap, sólo diez Títulos de Merced sin dividir de los 3 mil y tantos pre existentes.

Con esto, el proceso de división termina. Pero existe algo que no se debe confundir; los procesos de subdivisión sucesiva dentro de las tierras de los Títulos de Merced no se origina

con el período militar, sino que se viene dando desde poco después del establecimiento de las reducciones y desde que las familias decidieron tener una tenencia individual; de hecho, con el paso del tiempo, subdividieron sus tierras entre los hijos, y esos hijos tuvieron otros hijos, que vuelven a subdividir entre ellos, y etc. Es necesario distinguir estos procesos de división de las subdivisiones. Y como hemos dicho, las primeras legislaciones divisorias surgen ya en 1927.

La diferencia es que en el período militar la división fue forzada, y que la intención inicial de esta legislación era que una vez terminado el proceso, ya no se hablase ni de tierras ni de personas indígenas.

Con ello se establece que tal proceso es independiente, y no nace con el establecimiento de la división de las reducciones en el período militar. La subdivisión nace como una salida, como una solución al hecho de que la gente quiere legarle a sus hijos un medio para sobrevivir, una parte del suelo. Cabe hacer notar, que las legislaciones, incluida la militar, prohíben la subdivisión legal de la tierra en las reducciones indígenas, aún en el caso de muerte - salvo circunstancias excepcionales, que requieren aprobación, y en que los lotes resultantes sean de al menos tres has. Vale decir, no existe la subdivisión legal.

¿Cuál fue, entonces, el efecto de la legislación divisoria? Además de las titulaciones individuales, y de que los mapuche pudieran, teóricamente, comprometerse en solicitudes de préstamo, créditos, ingreso a sistemas financieros, etc. otro efecto esperado era, a corto plazo, la venta o el traspaso de las tierras indígenas. Al respecto, no está claro ni se ha estudiado, cuándo y dónde se perdió tierra por este proceso de división, eso no se conoce totalmente; sólo se sabe de casos puntuales de pérdida de tierras por particulares, de pérdida de tierras con empresas forestales, etc.

Sin embargo el principal problema respecto a pérdida de tierras por la ley militar, es que desde el punto de vista legal declara caducas las situaciones de usurpación, al dictaminar que no se aceptaban reclamos por situaciones posteriores al 31 de diciembre de 1976, y entonces no podrían darse más conflictos ni juicios por tierras usurpadas, estos quedan clausurados y sancionados. Nótese que esta ley se dicta en 1979 y legisla hacia atrás en el tiempo. Si había otros reclamos, los jueces debían retrotraer la situación a la existente a diciembre de 1976, y/o a la situación en la fecha de los conflictos en los juzgados, en los tribunales.

Un segundo factor que facilitó la pérdida de tierra, pero que tampoco se ha cuantificado, es que la ley para los procesos de división, establece quienes se titulan dentro de las reducciones, es decir quienes son ocupantes; y define como tales a cualquiera que trabaje un pedazo de tierra dentro de los Títulos de Merced. Desde el punto de vista de la legislación del Estado y de la ideología de la época, no se incluye el problema de la etnicidad, no se diferencian los ocupantes mapuche o no mapuche. Cualquier ocupante de tierra dentro de una reducción pasa a ser ocupante legítimo, y tiene derecho, por tanto, a solicitar el proceso divisorio.

Recordemos que la ley establecía que bastaba una persona ocupante que la solicitara, para iniciar la división de una reducción. De allí entonces que un wingka, que tiene tierra usurpada, es reconocido legalmente como ocupante y podía pedir el proceso de división, y así tener el derecho al título de esa tierra.

Ese fue un efecto muy cuestionado de la ley de la época, pero no se ha estudiado a cuanta pérdida de tierra llevó. Lo claro es que incluyó a usurpadores dentro de las áreas de tierras indígenas, en calidad de ocupantes legales, cuestión que se mantiene hasta hoy día.

¿Qué pasó con la gente que no estaba in situ en el momento que llegó la división?

La ley estableció un proceso indemnizatorio a cargo del Estado, que era cancelado en dinero. Se fijaba un plazo de 6 meses, una vez que el juez mandaba a publicar el inicio de un proceso de liquidación y división de comunidades, para que todos quienes, en Chile o en el resto del mundo, creyeran tener derecho allí, hicieran presentes sus derechos; quienes no eran ocupantes reales de la tierra, y por ende no la trabajaban, tenían acceso a una compensación, teniendo los antecedentes para demostrar que sí tenían derechos a la tierra, es decir, que eran descendientes de quienes tenían un Título de Merced. A esas personas el Estado les canceló el avalúo fiscal de la tierra, más el IPC, que había corrido entre el momento que el juez decretó que se iniciara la liquidación y el momento en que el juez aprobaba definitivamente la liquidación. Eso entonces, les era cancelado. Quienes no supieron, no llegaron, y no reclamaron, perdieron su cantidad de dinero.

¿Aún no termina eso?

No termina si es que todavía hay reducciones en un proceso de división, porque después de los 6 meses iniciado el proceso, caducaban las posibilidades de pedir la indemnización.

La legislación siguiente, es la ley 19.253, dictada durante el gobierno de Patricio Aylwin. Esta legislación, desde el punto de vista de los problemas heredados de las legislaciones pasadas, optó por una negociación política, por un criterio que llamó de realismo político, que estimó no asumir el problema de las tierras usurpadas. Desde ese punto de vista, esta ley 19.253, reconoce implícitamente lo establecido por la ley de Pinochet, en cuanto a que legalmente las situaciones de usurpación caducaron, y toma una vía indirecta, que es tratar de recuperar las tierras usurpadas a través de los Fondos de Tierras. Y las acciones de estos Fondos de Tierra, dependerán de los presupuestos que el Estado asigne. Además, en la ley, tales Fondos son planteados no estrictamente para devolver tierras usurpadas, sino para ampliar las tierras mapuche.

Y ahí se produce algo que yo creo muy interesante, y paradójico, del punto de vista de lo que pasa a los Estados y a los políticos y legisladores. Ello es que el mecanismo de la ley pro-

mueve que los mapuche hagan recuperaciones de tierras, si es que quieren recuperar sus tierras usurpadas. Porque, como esta ley no modificó la ley militar, un mapuche al que le han usurpado tierras no tiene posibilidad de recurrir a ningún artículo legal para reclamar, pues no existe un artículo que permita iniciar acciones al respecto. Entonces, ¿qué puede hacer si tiene tierras que han sido usurpadas? Provocar un conflicto de tierras. ¿Porqué? Por que si hay un conflicto de tierras, tiene que intervenir la Conadi y tratar de hacer operar el Fondo de Tierras; y vía compra a los dueños de esas tierras usurpadas, devolver la tierra que ha sido usurpada a los mapuche.

Por esta razón es que consideramos que en la ley de Aylwin no se estableció nada. Debemos recordar que esta ley fue negociada y discutida en las comunidades; las que plantearon como propuesta, el tema de las tierras usurpadas y el planteamiento mapuche y de las organizaciones fue de que estas tierras fueran recuperadas. Pero se planteó que en el momento político, de transición del gobierno militar al de la Concertación, era imposible manejar ese tema, menos aun en el parlamento, y que del punto de vista de un criterio real, de medida efectiva, era imposible devolver las tierras usurpadas, porque fueron usurpadas por individuos que ya no viven, que quizás hoy día tienen descendientes. Y el Estado no puede, en virtud de la acción que hicieron sus antepasados, quitarles las tierras a los actuales tenedores.

Por otra parte, el tema provocaría un conflicto con las organizaciones gremiales de los dueños de las tierras, los agricultores, lo que sería un conflicto político de enorme envergadura. Cabe recordar, a propósito de esto, que en el gobierno de la Unidad Popular, cuando los mapuche ven que el gobierno no es represivo y que el tema de las tierras se había hecho cada vez más conflictivo y asfixiante, inician en Cautín una oleada de recuperaciones de tierras, se dice que por casi 200 mil has, en 262 acciones de recuperación, entre noviembre del 70 y septiembre del 73. Y eso desató un pánico y un escándalo político nacional que, entre otras cosas, uno puede presumir que tuvo un resultado en la represión regional, ya que el Informe Rettig dice que Cautín es la región más castigada del punto de vista de los atropellos a los DDHH en cuanto a Detenidos Desaparecidos y Ejecutados. Más del 50% de los casos se dice que son mapuche. Se supone que uno de los argumentos principales fue la movilización para recuperar tierras usurpadas, en el período de la UP.

Sin embargo, la recuperación de las tierras usurpadas ha sido una de las demandas históricas de los grupos mapuche hasta hoy día; seguida de la ampliación de tierras. Recuperar las tierras usurpadas, es una petición humilde por parte de los mapuche. Es decir “volvamos a las tierras que el Estado nos dio con los Títulos de Merced”, nada más que eso, «entréguenos de nuevo las 500 y tantas mil has. que el mismo Estado nos reconoció». Para que eso suceda, faltan como 100 mil has. En segundo lugar, la demanda por la ampliación: “Ampliémoslas, porque objetivamente son pocas. Hoy día somos casi 300 mil mapuche en áreas rurales, y tenemos menos que la cantidad de tierras que le entregaron a 80 mil mapuche en el siglo pasado”.

Otros grupos indígenas en el mundo han dicho: “devuélvannos parte de las tierras que tuvimos, que nos reconoció la Corona y, si entendemos que el Estado no puede devolverlas entonces compénsenos, denos una indemnización económica, por varias generaciones». La situación mapuche, también ha ido derivando en lo socioeconómico, argumentado que la situación de pobreza que los aqueja actualmente se debe a una medida que tomó el Estado chileno hace 100 y tantos años atrás, sobre la cual ellos no tienen ninguna responsabilidad; y demandan al Estado que reconozca la deuda histórica. Eso, porque el Estado es una figura absoluta en el tiempo. Los gobiernos no. El Estado chileno estableció esa política. Y ese Estado hoy día, desde el punto de vista jurídico, es el mismo, es la misma persona, y como tal, jurídicamente, tiene que reconocer sus culpabilidades, sus atropellos.

Volviendo a la ley 19.253, ¿qué elementos nuevos estableció?

Por primera vez en Chile - porque en la UP ello no ocurrió - hay una concepción de que existen pueblos indígenas, como tales, en el país. Sin embargo ustedes saben que en la ley no hubo reconocimiento constitucional, ni declaración de Chile como país o como Estado pluricultural ni pluriétnico. Hay una diferencia importante entre reconocer a los pueblos indígenas y el reconocimiento constitucional de que existen pueblos indígenas. De acuerdo a la evolución del derecho internacional, los pueblos indígenas, reconocidos constitucionalmente, tienen derechos como pueblos. Y pueblos es una figura jurídica que tiene derecho a la autonomía y autodeterminación dentro del Estado.

Cuando se propuso la ley de Aylwin, se habló del reconocimiento constitucional y la declaración de Chile, entre otras cosas, como un Estado pluriétnico. Eso no fue aprobado en el parlamento, pues si se reconoce que existen pueblos, se están reconociendo derechos particulares y específicos, respecto de los chilenos, les estamos reconociendo derechos políticos, como la autonomía y la autodeterminación en sus propios asuntos.

Al menos el Estado chileno dijo “Hay pueblos indígenas, hay grupos indígenas”, y es deber del Estado preservar la cultura, iniciar programas de salud intercultural, de educación intercultural, etc.

Reconoció también el problema de la escasez de tierra, y se planteó un Fondo de Tierras y Aguas.

Además se planteó algo nuevo, que nunca se había reconocido, y que desde el punto de vista étnico, muestra que hay un criterio de etnicidad. El Estado permite, a través de la ley, la constitución de comunidades indígenas como personas jurídicas, figura distinta a la reducción. La reducción, como vimos, nace del Título de Merced, mientras que la comunidad es una creación propia de la vida social mapuche, que incluye un espacio, que puede tener una o más reducciones, en que se da la mayor densidad de relaciones económicas, sociales, matrimoniales y rituales. La comunidad es la unidad ritual y ceremonial. Por ejemplo, en un

sector mapuche los cementerios no son de la reducción, sino que los cementerios agrupan a las personas que se consideran parte de una comunidad. Esta figura, que existe como hecho social y cultural real para los mapuche, nunca había sido reconocida en la legislación chilena.

La legislación de Aylwin permite que las comunidades puedan constituirse jurídicamente, y les entrega derechos, como personas, independientemente de los miembros específicos que los componen. Eso es un punto muy importante, que revela una percepción distinta del tema de la etnicidad y un cierto reconocimiento de las formas de vida de los mapuche del área rural.

Sin embargo, hay otros problemas que muestran que este criterio de etnicidad no es permanente en la legislación última. Uno de ellos es la idea de las áreas de desarrollo, sobre las cuales hay una enorme confusión, incluso en la misma Conadi. Si se examina cuidadosamente la ley, esas áreas no son áreas de desarrollo indígena, - tal como se entiende y como se conoce de experiencias de desarrollo indígena en otros países. Esas son áreas donde se van a priorizar la «focalización» de recursos del Estado, que en general se derivan de las políticas sociales de este. Además tales áreas tienen que cumplir con una serie de requisitos, para ser declaradas áreas de desarrollo, lo cual, no tiene nada que ver con lo étnico. Por ejemplo, la ley establece que para ser área de desarrollo, primero tiene que tener homogeneidad ecológica, vale decir, ser - desde el punto de vista ecológico - más o menos similar en toda su extensión, ¿qué tiene que ver eso con lo indígena?

Ello muestra que esta no es una política étnica, pues sí elaborar sus planes de desarrollo socioeconómico en un espacio dado, estima conveniente distinguir áreas homogénea desde el punto de vista ecológico, la priorización es otra. Por tanto, esa idea de homogeneidad ecológica no obedece al criterio de etnicidad de la región, y no tiene nada que ver con étnico; y sin embargo, es puesto como requisito para la constitución de áreas de desarrollo indígena. Por otra parte, la ley no reconoce en el territorio de áreas de desarrollo la participación real y/o el control del desarrollo indígena por los propios indígenas. Dice la ley que serán áreas de desarrollo sólo las que cumplan tales y tales criterios, y en ellas se priorizará la focalización de recursos. Y quienes trabajan en organismos públicos lo saben: focalizar recursos, eso es una parte de las políticas sociales. Y la focalización de recursos es posible según los presupuestos que tengan los ministerios, y los presupuestos de políticas sociales.

Las áreas de desarrollo indígena, en otros países, son áreas donde hay administración o coadministración indígena del espacio territorial considerado, donde ellos toman decisiones sobre los planes a desarrollar, sobre el seguimiento y el manejo de los planes y proyectos. Además, ellas tienen un presupuesto propio en tanto área de desarrollo indígena, no dependen de que se «focalicen» más o menos recursos, pues su presupuesto viene establecido en el presupuesto anual del país, de la nación, y gran parte de este es administrado por los mismos indígenas.

La historia nos muestra que hubo un punto en el tiempo en que los mapuche eran independientes, hasta el inicio de la sucesión de normas: sistemáticamente el Estado nacional, a través de sus legislaciones, de sus políticas agrarias, de políticas educacionales, etc., ha mantenido siempre a este sector mapuche como un sector marginado. Desde ese punto de vista, podemos considerar que el establecimiento de las reducciones marginó, discriminó, a un conjunto de la población que fue incorporada forzosamente al Estado chileno y al territorio chileno, por décadas y décadas hasta hoy día.

Hoy, ante el cúmulo de situaciones lesivas y abusivas las poblaciones se movilizan, algo que ha estado ocurriendo cíclicamente en Chile. Los problemas de recuperación y movilización no son sólo de ahora; ocurrieron en el período de la UP, ocurrieron en el período militar, ocurrieron en el período de Ibañez, etc. El problema mapuche es un problema que siempre enfrenta el Estado, y siempre lo trata, discursivamente, de la misma manera: como un problema que corresponde sobre todo a categorías de campesinos pobres; como problema que es aprovechado por los movimientos de ciertos sectores políticos, que quieren provocarle problemas al Estado. No como un problema de etnicidad.

El actual ministro de Mideplan¹, ha declarado que aquí no hay problema de autonomía ni autodeterminación, sino que el problema que hay aquí es de pobreza y eso es lo que se debe resolver.

Eso parece decir que todavía la autoridad de gobierno no entiende el tema. Eso es lo más grave, y cuando se habla de voluntad política, se debe tener claro que para comenzar a tenerla hay que empezar a cambiar los paradigmas culturales desde los cuales reflexionamos los acontecimientos, los sucesos, así como las existencias de los otros y las diferencias que tenemos con los otros. Y esto no se percibe en el aparato político, burocrático o público en Chile, tampoco en el sector privado.

En tanto antecedentes jurídicos, Chile es uno de los países más atrasados de América Latina, legislativamente. Y la visión del Estado y del gobierno chileno es que, al contrario, con la promulgación de la ley indígena - y lo han dicho públicamente- pasamos a tener legislaciones indígenas de las más avanzadas del mundo. Eso es absolutamente falso.

Como ejemplo les puedo decir que Brasil, Paraguay, y otros países, ya en los años 80 tienen incorporada en su constitución el reconocimiento de los pueblos indígenas, y tienen un articulado que es muy interesante, que a la larga va a llegar a darse en Chile. Esos países reconocen que los derechos de los grupos indígenas son anteriores a los derechos del Estado. Cuestión impresionante, desde el punto de vista de la juridicidad que ha tenido el Estado contemporáneo, de sus bases filosóficas y políticas. ¿Y porqué lo reconocen así? Porque parten de una cuestión de hecho, que es que el Estado brasileño, por su parte, y el Estado paraguayo, al igual que el chileno, se constituyó después de reconocer que existían los indí-

¹ A la fecha de agosto de 1999, el Sr. Germán Quintana.

genas. Se constituyó en base a un territorio que estaba ocupado por indígenas.

Y este sólo hecho está originando, en muchos países, un cambio en la legislación, que en algunos casos se está llamando el "título nativo". El argumento del título nativo es: "Mis antepasados estuvieron antes que los antepasados de ustedes". Y eso lo ha hecho Brasil y lo ha hecho Paraguay, por lo menos, en el plano legislativo y discursivo; no sabemos lo que hay en la realidad, - si hay atropello o no - , pero al menos se tiene una concepción y legislación distinta respecto a esos derechos.

Así, Brasil ya ha entregado 60 millones de hectáreas a grupos indígenas, y el total de indígenas que hay en Brasil es mucho menor al que hay en Chile. Al respecto, todos los Estados latinoamericanos están entregando millones de hectáreas a los grupos indígenas, desde los años 80, incluido Perú, Ecuador, Colombia, etc. En Colombia tienen incluso áreas coadministradas de parques nacionales y tienen principios políticos de respeto a regiones semi-autónomas, en base a lo que era el tradicional Cabildo Indígena. Los casos de Panamá o Nicaragua, son mucho más lejanos aun, donde hay autonomía, autogobierno, autodeterminación y manejo en asuntos propios.

Entonces, la legislación chilena no es avanzada. Y en eso insisto, porque nuestra percepción como chilenos, - las ideas en el conocimiento común en esta sociedad, la percepción del sector privado, la del aparato público- , está muy lejos de lo que está ocurriendo hoy día en el plano internacional y del derecho, respecto al tema de los pueblos indígenas. Y nos muestra que como chilenos no entendemos las relaciones interétnicas e interculturales; tampoco los temas en torno a los derechos del otro.

Lo que debemos entender hoy día es que no importa el tema de la cantidad de indígenas. El tema de la existencia de especificidades étnicas y/o de grupos indígenas es un problema cualitativo en el Estado contemporáneo, pues es un aspecto que tiene que ver con el carácter o naturaleza del Estado actual y de la sociedad que se construye contemporáneamente. Y en nuestro caso, aunque tuviera que ver con números, mal que mal los mapuche alcanzan a más de un millón, lo cual tampoco es una cifra despreciable. Y tal cifra los sitúa como el cuarto grupo étnico más numeroso en América Latina, porque en otros países hay muchos grupos indígenas, pero con menos población que los mapuche.

Por tanto, desde lo que hemos comentado, podemos considerar que el Estado chileno está dando sus primeros pasos en el tema. Habrá que ver la voluntad política para dar primeros pasos de calidad.

Volviendo a lo dicho por ustedes al comienzo: no van a haber cambios a gran escala mientras no cambie el tipo de perspectiva del Estado y la sociedad. Porque, como se ha dicho, la pobreza es una parte de la cuestión, pero la pobreza está determinada por estas medidas; la pobreza fue determinada por la no existencia de políticas específicas y especiales.

Otro punto en tal perspectiva es la posición y el trato, la nueva relación que tenemos que tener con los pueblos indígenas. No basta sólo con decir que vamos a tener mil becas indígenas más. Pues, ¿Cuántos estudiantes secundarios hay en la región?, ¿Cuántos son mapuche?, ¿Cuántos universitarios? Sólo 1% de los estudiantes de las universidades regionales tiene ascendencia mapuche. ¿Por qué? ¿Son deficientes, nacen deficientes? No es sólo un problema de pobreza, es un problema que requiere esta nueva visión que se tiene que traducir en políticas especiales.

Y eso, se tiene que entender, que implica cambiar la lógica de nuestro Estado, de nuestra juridicidad, y de la sociedad. Porque se ha llegado a decir que las políticas especiales son segregatorias de los derechos de los demás, y ha habido gente que ha dicho «¿por qué no establecemos políticas especiales para los hijos de los colonos suizos, los colonos alemanes, los colonos franceses, de los pescadores de la costa, etc.?» Si los mapuche quieren políticas especiales para ellos ¿por qué no para los otros?

En nuestra lógica, es difícil entender los derechos que reclaman los otros, derechos que les hemos arrebatado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer y promover?

Creo que una de las cuestiones básicas es repensar nuestras políticas de vinculación y participación con las poblaciones y recursos que tenemos en la comuna. La gente tiene enormes cantidades de recursos y potencialidades, la primera de las cuales es la existencia de ellos mismos. Y creo que quienes se piensan como gestores de desarrollo de distintos programas, deben notar que el primer papel de un gestor es darse cuenta de cuales son los recursos que tiene al frente y de cómo coordinarse con esos recursos, para acordar acciones hacia objetivos comunes.

Eso significa cambiar también nuestros parámetros de cómo se hacen los programas de desarrollo. Pasar de decir “yo hago programas de desarrollo, yo soy técnico, yo soy veterinario, yo soy ingeniero, yo soy agrónomo, yo soy profesor, yo soy antropólogo... yo hago para los otros, nosotros planificamos, nosotros hacemos los diagnósticos”. ¿Los otros son nuestros objetos?. Acaso preguntamos, ¿no lo podemos hacer juntos, la gente no puede aprender, no lo podemos hacer participativamente, aunque sea en algunos niveles, en algunos planes, no podemos coordinar participativamente los recursos que tenemos?.

Desde ese punto de vista estableceríamos otro tipo de relación, otro tipo de prioridades también en nuestra relación con la población indígena, la población mapuche. Piensen que los mapuche van a pedir - ya están pidiendo algunos, y va ser aún más en el futuro- participación en la administración local, participación en las municipalidades, participación en la elección de autoridades, en los mismos concejos comunales. Si tenemos una comuna con 60, 70, 85% de población mapuche, ¿por qué en la municipalidad no hay nadie que represente, que tenga que ver con esa población? Esa demanda se va a plantear en el tiempo, y la peor

reacción sería sentirnos amenazados en nuestros roles, en nuestros status, en nuestras funciones o en nuestras capacidades técnicas.

Nuestro tema es ¿cómo construimos una sociedad mejor, desde el punto de vista social, económico y cultural?. Y esto lo tenemos que hacer con otros, debemos pensar que "no tengo yo la receta", tengo que hacerlo con otros, no lo puedo hacer negando los derechos, la participación y la expectativas culturales más amplias.

Por lo tanto creo que los objetivos de estos seminarios, de estos trabajos son, no sólo apropiarnos del conocimiento, ver cómo podemos aplicar conocimiento, sino cómo podemos transformar ciertos parámetros que han orientado nuestras conductas, nuestras perspectivas, nuestras evaluaciones de la situación, del trabajo de los otros, de lo cultural. En el hecho ellas deben ser también, formas de cómo nos revisamos nosotros mismos en nuestros propios quehaceres, para tratar de establecer nuevas bases en este objetivo que suponemos común, que nos une, que es que todos los seres queremos vivir en un mundo mejor.

Nota: Este texto corresponde a la transcripción revisada del material presentado por el autor en el evento. C.E.